

### EL PRECIO DE LAS VACAS LOCAS

---

Lucía Argos

El miedo alimentario a las vacas locas ha ocultado durante algunos meses la verdadera dimensión del problema: su impacto económico. Un precio que pagarán los españoles, como el resto de los países europeos afectados, mediante el encarecimiento de los productos de sustitución, a través del erario público y con el coste de la reconversión de un sector que desde la dehesa a la mesa, hasta ahora, era autosuficiente. Las primeras 35 vacas afectadas en España por encefalopatía espongiforme bovina han puesto en marcha 60.000 millones de pesetas del Ministerio de Agricultura para paliar unos efectos en cadena. El propio ministro, Miguel Arias Cañete, ha calculado que serán necesarios otros tantos de aquí a final de año, haciendo una proyección de los primeros seis meses. Se aproxima a la cantidad que ha presupuestado la Comisión Europea para combatir la crisis a nivel comunitario durante todo el año 2001, en total, 971 millones de euros (161.000 millones de pesetas). Y no hay más, han advertido las autoridades comunitarias, que ya calificaban esta crisis agrícola como la peor de la historia de la Europa común antes de que aparecieran los efectos devastadores de la fiebre aftosa.

El problema no lo van a pagar sólo los consumidores carnívoros. Tanto el 50 por 100 de los ciudadanos que han evitado la carne de vaca de sus menús, como los que presumen de vegetarianos han sufrido las consecuencias del incremento del IPC en el mes de febrero.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), algunos de los principales culpables del aumento del 0,3 por 100 fueron los encarecimientos de la carne de ave (3,6 por 100), la de cerdo (4 por 100) y otras carnes (1,4 por 100), sin que fueran contrarrestados con un abaratamiento del pescado. Febrero ha sido el primer mes en acusar los efectos de la crisis bovina en España, sólo mantenida artificialmente por las ayudas aprobadas por el Gobierno a finales de diciembre.

Las arcas de Bruselas están vacías. Vanos han sido los intentos de varios ministros europeos, entre ellos el español, de conseguir más financiación para paliar los efectos directos de la epizootia bovina en un sector encadenado que emplea a medio millón de familias. Al final, esos 60.000 millones de pesetas que harán falta los va a pagar también el consumidor en forma de un impuesto finalista que estudia en estos momentos el Ministerio de Hacienda. La idea es crear una tasa, similar a la ya impuesta en Francia, que permita hacer frente a los efectos de la enfermedad en el ganado y, muy probablemente, a la reconversión paulatina del sector. Aunque aún no está decidido, se baraja una tasa que incrementaría el precio de la carne de vacuno en el mercado minorista un 1,5 por 100 por kilo de peso, según fuentes ganaderas.

La enfermedad de las vacas locas ha puesto al Estado en una curiosa posición: ser el artífice

del funcionamiento del mercado. Le ha convertido en el principal comprador de carne en todos los eslabones de la trabada cadena de producción. Desde la aparición el pasado 22 de noviembre en Lugo de la primera res enferma, el Gobierno ha comprado toneladas de carne y las ha congelado para evitar el desplome del mercado ante la caída de la demanda; está pagando la destrucción de animales que hasta ahora se producía por degradación natural en las propias granjas cuando morían; se ha hecho cargo de las harinas animales que durante años se han estado utilizando como base de alimentación en las granjas, como también está subvencionado la destrucción de piensos que lleven en su composición las harinas prohibidas. Desde hace un mes, ha empezado a comprar las reses mayores de 30 meses que antes iban al mercado. La última licitación prevista será el próximo cinco de junio, si bien la Comisión Europea ya ha avanzado su intención de continuar con este programa de destrucción hasta finales de año. Es mucho más barato, ha dicho el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que la fórmula clásica de intervención consistente en el almacenamiento público de excedentes.

Los ganaderos se quejan de que pierden hasta 60.000 pesetas por la venta de los animales con destino a la destrucción e incineración. Es una fórmula eficaz para reducir los excedentes y el riesgo de derivar reses enfermas hacia el consumo –ya que es a partir de los 24 meses cuando se manifiesta la encefalopatía– y también para evitar que un ganadero con una posible vaca enferma tenga que sacrificar a toda su ganadería como medida de prevención. En España no se exige el test del prión a estas vacas que se venden para la destrucción lo que se critica desde algunos sectores por cuanto este sistema nunca dejará ver la magnitud real de la encefalopatía. De hecho, desde el inicio del programa, la aparición de vacas locas se ha ido desacelerando en las comunidades españolas. Como medida del impacto de un animal enfermo en una granja baste recordar que las primeras 12 vacas enfermas se llevaron por delante a otras 400 de sus propias cabañas, según datos de febrero del Ministerio de Agricultura.

Los ganaderos calculan que llevan perdidos unos 70.000 millones de pesetas y desde hace mes y medio esperan un paquete anunciado

de medidas de ayuda directa. Esperan una inyección económica prometida por Agricultura que doblaría las cantidades que reciben de primas para las vacas nodrizas, una recalificación de los precios destinados a la destrucción de reses así como medidas fiscales – rebajas en los módulos impositivos– o aplazamientos en los pagos a la Seguridad Social, informan desde la COAG. Todo ello bajo la incertidumbre de un anuncio de reconversión del sector que llega lento, pero seguro, desde Bruselas.

La UE ya no parece poder sostener el modelo de ganadería extensiva que hizo accesible la carne para todos pero que, al mismo tiempo, salió cara en excedentes y en excesos alimentarios con el ganado que han terminado por afectar a la salud y a la seguridad del consumidor. El máximo rendimiento al menor coste, hizo carnívoros a los rumiantes, caníbales a las aves de corral y degustadores de bovinos a los peces de piscifactoría. Unos 80 jóvenes muertos en el Reino Unido de una extraña y dramática enfermedad sembró la alerta en toda Europa sobre el precio de los excesos. Detrás siempre hay una valoración económica. A la UE le sale caro subvencionar la carne que no se consume. Por tanto, la propuesta reciente de la CE es la de reducir de 2 a 1,8 unidades por Ha. de ganado mayor (una vaca por unidad) la densidad máxima que deben tener las explotaciones de bovinos con el objetivo final de fomentar la producción ganadera intensiva. Fischler propone, igualmente, una reducción del número de vacas nodrizas con derecho a ayudas comunitarias, ya que de ellas depende la producción futura de vacuno.

El efecto económico en cascada ha afectado de una forma singular a los mataderos y salas de despiece. Su actividad ha estado amenazada por tres frentes. Si no entraba carne, se paralizaba y también si no salía por la caída de la demanda. En algunos momentos, el sacrificio ha supuesto en los mataderos españoles la mitad que en las mismas fechas que el año anterior. Pero es que, además, los mataderos han trabajado bajo la espada de Damocles de la parálisis al no poder desprenderse de los restos animales, despojos, que hasta el pasado uno de enero se transformaban en harinas cárnicas. Hasta que estos últimos industriales no llegaron a un acuerdo con el Gobierno para vender su producción –se les adquirió un paquete de 15.000 toneladas en enero y se sub-

vencionó su destrucción-, el sector ha vivido varios momentos de amenaza clara de colapso.

En estos meses, mataderos y salas de despiece han experimentado lo que el presidente de la patronal Asocarne, Fernando Pascual, define con humor como la "metástasis de las vacas locas". La inmediata sustitución en los hogares del vacuno por el porcino hizo a las industrias sobredimensionar el mercado de esta última carne para cubrir los gastos fijos. Los precios del porcino terminaron también por caer.

El último eslabón de la cadena, los carniceros, cifran en 9.000 millones de pesetas sus pérdidas desde diciembre hasta aquí. No son los más vulnerables, pero sí los que han puesto cara al rechazo diario que se ha producido en-

tre los españoles a la carne de vacuno. Son las economías familiares las que han enjugado el tirón, porque, como recuerda José Moya, presidente de la Confederación Española de Detallistas de la carne (Fedecarne), se trata de microempresas "que no pueden acogerse a regulación de empleo". Este sector ha pedido al Gobierno formalmente una reducción en los módulos impositivos así como la eliminación del impuesto de actividades económicas.

La crisis apenas acaba de empezar. A los problemas internos se suman los derivados del cierre momentáneo de los mercados extranjeros que ha comportado para todos los países de la UE los primeros focos de fiebre aftosa. Es una epizootia mucho más epidémica y devastadora que la encefalopatía espongiforme bovina, advierten los expertos. De momento, no ha llegado a España.